

Gloria Ramírez / Ex presidenta de la Federación Colombiana de Educadores

“Hay un plan para exterminar al movimiento sindical de Colombia”

por Jaime Fernández

En Colombia mueren asesinadas 30.000 personas al año, el mismo número de víctimas de la dictadura de Pinochet, y otras 30.000 están involucradas en las facciones guerrilleras. En esta entrevista, la sindicalista colombiana Gloria Inés Ramírez denuncia, además, que hay un plan para exterminar al movimiento sindical, como lo demuestra el asesinato de 3.500 sindicalistas en los últimos diez años

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Colombia?

Colombia es un país estratégicamente muy bien situado y tiene un interés especial para Estados Unidos, en tanto que abre la puerta a América Latina. Desde hace más de cuarenta años sufrimos un conflicto armado que se traduce en una violencia estructural derivada fundamentalmente de la exclusión política, económica y social que padece la mayoría de los 42 millones de colombianos y colombianas. Según el último Informe de Desarrollo Humano, un 80% de la población vive en un estado de pobreza y seis millones de personas, en la miseria absoluta. A esto hay que añadir los dos millones de desplazados dentro del país. Esta situación se ha agravado con la política de seguridad que está aplicando el actual Gobierno, intensificada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El presidente de la República, Álvaro Uribe, ha decidido que para solucionar los problemas de Colombia se requiere un pulso militar.

¿De dónde proviene la violencia?

El conflicto es muy complejo. Por un lado, están los grupos alzados en armas, como la guerrilla, que entre todas las facciones agrupa a unas 30.000 personas, lo que obliga a preguntarse qué es lo que hace que una persona decida entregar su vida a un proceso armado. Por otro lado, están los paramilitares, ligados a su vez al narcotráfico, que es el nuevo elemento que articula este fenómeno violento. El problema radica en que el Gobierno ha querido quitarle a los grupos guerrilleros su estatus de revolucionario para tratarlos como si fueran delincuentes o simplemente terroristas.

La violencia política en Colombia se ha convertido en un método habitual para exterminar al adversario político

¿Cuál es su actitud ante esta postura?

Creo que es preciso diferenciar. El que estos grupos cometan algunas acciones de carácter terrorista no significa que su estructura sea terrorista, puesto que tienen más de cuarenta años de existencia y surgieron como resultado de la forma en que nuestra clase dirigente y

política ha resuelto las contradicciones de la lucha por el poder. Colombia ha sufrido el azote de varias guerras civiles. Cada vez que aparecía una figura política que iba contra los intereses de la clase dirigente y política o un candidato a la presidencia de la República por opciones populares, se lo asesinaba. Esto demuestra que la violencia política no es un fenómeno espontáneo sino que se ha convertido en un método habitual para exterminar al adversario político.

¿De quién ha recibido la amenazas de muerte?

En octubre de 2003 recibí un escrito de un grupo de paramilitares en el que se nos acusaba de “lacayos comunistas”, de “subversivos camuflados de civiles”, de “apátridas”, de ser “plagas” y “raticidas sindicales”, y de promover una “política izquierdista”, por lo que se nos amenazaba con una “campaña de exterminio”. Lo curioso es que según la Fiscalía del Estado el grupo que me amenaza de muerte no existe.

¿Tienen protección policial?

Por medio de la Organización Internacional del Trabajo, y con la colaboración del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores, se ha creado un programa especial de protección a sindicalistas por el que disponemos de chaleco antibalas. A los dirigentes que corremos un riesgo más alto se nos ofrece un coche blindado, escoltas y apartamentos blindados. Nuestra vida se desarrolla en un cuadro, vivimos encajonados. Pero el debate de fondo es que el Gobierno nacional tiene que comprometerse a secundar un mensaje de la legitimidad del movimiento sindical, dando garantías para que puedan ejercerse actividades sindicales y hacer oposición.

¿Ha sufrido algún atentado?

Sí. En 1989 resulté ileso de un atentado, pero nadie puede librarme de las secuelas que dejó en mi hijo, que durante siete años tuvo que someterse a tratamiento psicológico. Bajo este clima de violencia, tu vida cotidiana cambia radicalmente. Es evidente que, tanto aquel atentado como las amenazas de muerte que he recibido, se deben al hecho de tener unas ideas claras sobre el proceso político de mi país, postular unos conceptos igualmente claros de oposición y ser militante de izquierdas y dirigente nacional del sindicalismo y de los maestros colombianos.

¿Qué opina de la política antiterrorista de Uribe?

Discrepamos de esta política porque creemos que nuestro país debe tener una salida diferente de la guerra, por lo que estamos trabajando para que haya una salida política negociada. Aunque cuando se habla de Colombia se alude siempre a la guerrilla, al narcotráfico y a los paramilitares, en el fondo se desarrolla una gran lucha social donde jugamos un papel esencial los agentes sociales que trabajamos por reformas políticas, económicas, por derechos y por libertades. El Gobierno ha dictado unas normas a la luz de lo que allí se denomina “seguridad democrática”, el llamado Estatuto Antiterrorista, rechazado por la ONU, la comunidad internacional y por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights y el movimiento sindical internacional.

¿Cuál es su principal objeción a esta normativa antiterrorista?

Que recorta las libertades individuales y de las organizaciones y otorga al Ejército facultades de policía judicial, lo que se convierte en una arbitrariedad que hace que una persona pueda ser detenida sin orden judicial o que sus teléfonos pueden ser intervenidos, lo que genera la “judicialización de la sospecha”.

Sin embargo, Colombia es una democracia.

En nuestro país se está aplicando con el mismo rigor las políticas de exterminio político contra los opositores que llevaron a cabo las dictaduras latinoamericanas en los años setenta. La diferencia es que Colombia hay elecciones. Pero resulta que en esa democracia tenemos en sólo un año más de 30.000 homicidios, casi la misma cantidad de personas que fueron asesinadas en Chile durante la dictadura de Pinochet. ¿Qué clase de democracia es ésta?

¿Cuál es el papel del movimiento sindical?

Ha sido decisivo en la movilización social y como dinamizador de las luchas sociales, planteando reivindicaciones sociales, pero también políticas. Hay un plan macabro de exterminio del movimiento sindical colombiano. Al Gobierno no le gusta escuchar esto, pero lo sostengo, aduciendo que se han producido más de 3.500 asesinatos de dirigente sindicales en diez años. Levantar un sindicato o ejercer actividades sindicales es un problema muy duro en mi país, como ha declarado la OIT.

¿En qué consiste el modelo de educación que propugna el Gobierno?

En entregar los colegios públicos para que los gestione el sector privado. De esta manera se ahorra una inversión directa y enriquece al sector privado. Esta política sigue las directrices de la Organización Mundial para el Comercio de mercantilizar la educación que, con ello deja de ser un derecho fundamental para todos. También discrepamos del concepto que el Gobierno tiene de la calidad educativa entendida como una materia prima empresarial.

“Hemos intentado que se respetase a las escuelas como territorios de paz”

¿Por qué se persigue fundamentalmente a los sindicalistas maestros?

No sólo porque, como enseñantes, somos dirigentes comunitarios sino porque FECODE, que agrupa a más de 300.000 docentes de todos los niveles educativos, es una organización que, además de la reivindicaciones del profesorado, mantiene una lucha clara por la defensa de la escuela pública y por una educación gratuita financiada por el estado y de calidad. Nosotros emprendimos una campaña en la que hacíamos un llamamiento a la guerrilla, a los paramilitares y al ejército para que respetasen las escuelas como territorios de paz, de modo que el Gobierno no acantone a los militares en los centros ni la guerrilla convoque reuniones en ellos y que los paramilitares no la utilicen como muralla o pantalla para cometer sus acciones.

“El Gobierno ha decretado que los sindicalistas somos posibles auxiliares de los terroristas”

¿Qué garantías de seguridad ofrece el Gobierno?

Que en cuanto organizamos alguna protesta, se nos persigue y encarcela. El Gobierno ha decretado que los dirigentes sindicales y los defensores de derechos humanos somos posibles auxiliares terroristas. Precisamente la amenaza de muerte que he recibido de los paramilitares se basa en el mismo argumento manejado por el Gobierno. ¿Por qué, si no pienso como el Gobierno, tengo que ser una terrorista? No señor, yo defendiendo la escuela pública y he dicho claramente que en Colombia hay un problemas grave: que mientras el centro de nuestro presupuesto nacional siga siendo la deuda externa, que se lleva el 40%

para el pago de sus intereses, en contra de la inversión social, nunca será posible un cambio positivo en el país. Nuestra alternativa es que no se pague la deuda externa, que se aplique una moratoria.

Gloria Inés Ramírez es licenciada en Física y Matemática por la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, (Colombia) y “magister” en Desarrollo Educativo y Social por la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fue presidenta de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Por motivos de inseguridad personal se ha visto obligada a abandonar su país y solicitar asilo en España, donde piensa residir con su marido e hijos mientras no cese la violencia en Colombia, con la ayuda solidaria de CC.OO. y de la Internacional de la Educación.